CAPÍTULO 7

EL TERROR EN LOS PAÍSES PEQUEÑOS

«AFILADA COMO UN HACHA Y SIGILOSA COMO UNA SERPIENTE»: ETA

Los vascos han habitado los 22.000 kilómetros cuadrados de una región que se extiende por la frontera franco-española y que llaman Euskal Herria desde hace mucho tiempo. Exactamente cuánto es un tema sujeto a discusión. Muchos nacionalistas vascos alegan que su presencia es aborigen. Hay antropólogos vascos que creen que éstos descienden de seres bípedos que habitaban cuevas y llegaron a adquirir forma humana sin que durante su evolución tomaran contacto con nadie más. El hecho de que el lenguaje vasco, el euskera, sea autóctono, es decir, que no esté relacionado con las lenguas indoeuropeas de sus vecinos de Europa, sirve para alimentar aún más el sentimiento de singularidad. Contribuye igualmente la convicción de haber sido víctimas del colonialismo español, un agravio que los vascos analizan compulsivamente, como quien usa la lengua para tantear un diente cariado¹.

Los vascos creen en una versión política de la caída de la gracia original, de la pérdida de las libertades históricas. La única vez en la que el País Vasco fue una entidad política individual data de cuando estuvo incluido dentro del Reino de Navarra. En la Edad Media los reyes castellanos se anexionaron su territorio, otorgando a los vascos derechos particulares (fueros). Con el fin de neutralizar a los batalladores señores de la guerra vascos, los monarcas castellanos concedieron derechos nobiliarios a los habitantes de las provincias vascas, Guipúzcoa y Vizcaya. Esto significaba que los vascos eran «hidalgos» con el derecho a servir en la administración del incipiente imperio español. Quedaban exentos del servicio militar y disfrutaban de importantes privilegios fiscales regionales. No había tasas a la importación de los productos extranjeros que entraban en la región, a la

vez que los vascos conservaban la capacidad de gravar los productos agrícolas procedentes del resto de España.

En el siglo XIX estas medidas proteccionistas ya no eran apropiadas para los manufactureros vascos de las prósperas ciudades industriales pero ponían a salvo los medios de subsistencia de muchos campesinos humildes. Otra línea de división, esta vez política, se abrió con las dos guerras carlistas de 1833-1840 y 1873-1876. La sucesión a la Corona española fue cuestionada por un bando liberal, que respaldaba la línea femenina representada por Isabel, todavía una niña, mientras que los reaccionarios navarros se aglutinaron en torno a su tío don Carlos. El campo luchó por Dios y por el rey —ya que, como punto de partida de la reconquista medieval y origen del fundador de los jesuitas, san Ignacio de Loyola, el campo vasco era católico militante— mientras que los habitantes urbanos de Bilbao y otras ciudades apoyaban a los liberales. Los liberales abolieron los fueros, excepto en Navarra, que se las arregló para conservarlos, lo que condujo a una acusada actitud de distancia entre Navarra y el resto de las provincias vascas. Así, mientras que los vascos reclaman a Navarra como su centro histórico, la mayoría de los navarros, incluyendo aquellos que hablan euskera, no se consideran a sí mismos como primeramente vascos. La ruptura generalizada del orden público en España tras estas guerras condujo a un aristócrata navarro a fundar la Guardia Civil, con sus peculiares tricornios que, irónicamente, a ojos de los nacionalistas se convirtieron en el símbolo más visible del gobierno colonial español en estas provincias del norte.

La emigración hacia las ciudades —en 1900 Bilbao había triplicado su población— provocó que el español se convirtiera en la *lingua franca* en las calles. A diferencia del catalán, que un español puede aprender fácilmente de manera informal, el vasco es tan sui géneris que requiere un esfuerzo significativo, comparable al aprendizaje del finlandés o el húngaro. Aunque el euskera sobrevivió en las zonas rurales, la lengua tendía a morir en los lugares donde la sociedad era más dinámica, para horror de la clase media vasca. Ésta se sentía marginada en su propio país por los proletarios socialistas hispanohablantes, cuyas blasfemias también ofendían a su fe, y por una avariciosa oligarquía local que tenía más tiempo para dedicar a sus socios comerciales británicos que a sus conciudadanos.

En este momento entra en escena Sabino Arana (1865-1903), hijo de un constructor de barcos y fundador del Partido Nacionalista Vasco o PNV en 1895. Arana creía que los vascos eran una raza distinta, con

grandes narices y una mayor proporción de personas con Rh negativo en la sangre que el resto de la población española. Se movía en arenas aparentemente menos movedizas, al menos en lo que a nosotros respecta, al alegar que los vascos tenían leyes únicas y su propio lenguaje, aunque eso pasaba por alto a aquellos vascos urbanos y liberales que habían defendido la abolición de los fueros como un obstáculo para la industria. Arana usó la Union Jack británica como modelo para la «antigua» bandera vasca, la *ikurriña*, excepto que ésta es roja, verde y blanca.

El deporte era una parte fundamental de la característica cultura local. Existían juegos comunales, que recordaban a los de las tierras altas de Escocia. Incluían el levantar y hacer rodar enormes piedras redondas sobre los hombros, la escalada, y la versión vasca del juego de la pelota, conocida como jai alai, en el que se lanza una bola contra las paredes de la pista por medio de una cesta curvada de mimbre que sale de la mano. Otras entretenidas actividades incluven el remo, tirar de una cuerda y darse cabezazos unos a otros (un pasatiempo nacional también en Glasgow), o arrastrar y empujar una gran piedra rectangular atada a dos bueyes. Los vascos son además dados a un tipo de improvisación poética parecida al rap, y tienen un peculiar instrumento musical llamado la txalaparta (las dobles consonantes son también típicas del euskera). Existe una cocina característica, que a menudo incluye el buey, el pescado y los frutos de mar, lo que puede explicar porqué los terroristas de ETA han atacado en dos ocasiones un restaurante situado cerca de Biarritz, en el País Vasco francés, del galardonado chef Alain Ducasse, obligándole a dejar de hacer negocios en la zona. Supuestamente se le consideraría culpable de reducir la cultura vasca a la industria del folklore².

El catolicismo vasco era también de la vertiente dogmática y contrarreformista del norte y rehuía al supersticioso y semipagano sur andaluz en formas que resultarían familiares para un francés o un italiano del norte. A diferencia de Irlanda, donde los curas católicos se han limitado a «animar» al IRA, aunque sólo un diminuto contingente ofrecía apoyo logístico a los terroristas, ETA ha incluido un importante número de antiguos seminaristas que aportaron una determinación moralizadora al asesinato de personas. También se usaron seminarios y lugares de retiro para albergar reuniones secretas de la organización. Por último, son los datos económicos los que desestiman cualquier asociación general entre la necesidad económica y el terrorismo. Arana describió la inmigración española como «una invasión de los socialistas

y ateos españoles», sugiriendo que si esto era colonialismo, era un colonialismo de los pobres. Históricamente, las provincias vascas han sido mucho más ricas que España en su conjunto, con la excepción de Cataluña, que también tiene un poderoso movimiento separatista (no violento). Tanto los vascos como los catalanes eran gentes laboriosas que miraban con condescendencia a la retrasada, indolente y estirada zona central castellana desde su posición de superioridad comercial. El País Vasco era un lugar rico, con empresas de armas, bancos, minas de mineral de hierro, astilleros y acero procesado. En 1969 Guipúzcoa, Vizcaya y Álava se situaron en primer, segundo y tercer lugar entre las cincuenta provincias españolas en cuanto a renta per cápita, con Navarra cerca en la séptima posición. Sentían que su productividad se gravaba de manera poco equitativa con el fin de mantener a los holgazanes y despilfarradores aristócratas castellanos del sur³.

El PNV era un partido nacionalista vasco y cristiano que en vísperas de la Guerra Civil encontraba oposición tanto en la derecha como en la izquierda. A la izquierda le molestaba la creación por parte del PNV de un sindicato nacionalista con el que competía por el mismo electorado de clase trabajadora, mientras que la derecha pensaba que los vascos formaban parte de una conspiración roja y judeomasónica para romper España. Aunque los vascos podían haber logrado el tipo de autonomía que la Segunda República había concedido a Cataluña, el feroz anticlericalismo de los defensores anarquistas de la República condujo a que hubiera malas relaciones y posteriormente a un repentino bandazo a la izquierda cuando la derecha llegó al poder en 1934 con el eslogan «Mejor una España roja que una España rota». Mientras los implacablemente reaccionarios carlistas respaldaban a los militares rebeldes en 1936, el PNV se mantuvo del lado de la República en el aislamiento que los rebeldes consiguieron imponer en las provincias vascas, incomunicadas con las principales áreas de apoyo republicano en torno a Madrid. Los vascos lograron autonomía durante un breve periodo, tras el juramento de su primer presidente, en una ceremonia celebrada en torno al viejo roble de la ciudad de Guernica, que poco después sería aniquilada por la Luftwaffe. El 19 de julio de 1937 el general Mola tomó Bilbao. Los batallones nacionalistas vascos se rindieron a los aliados italianos de Franco con la vana esperanza de evitar la venganza que éste impuso a sus antiguos oponentes. Las provincias vascas fueron ocupadas de una manera que la anterior mitología vasca no podía siquiera haber imaginado. La política estadounidense hacia Franco, quien como dictador fascista fue marginado, resultó crucial. La CIA se interesó por el PNV, a la vez que se enviaba a un coronel de Estados Unidos para entrenar a guerrilleros vascos en un campamento en las afueras de París. Cuando, a causa de las exigencias de la Guerra Fría, Estados Unidos decidió conservar a Franco en su puesto, éste pudo ejercer la represión sobre los vascos con impunidad.

Los vascos se vieron sujetos al control militar y la lengua vasca fue proscrita en la enseñanza y la vida social. Se prohibió a los sacerdotes utilizarlo en sus celebraciones y sermones, mientras que la gente tenía que usar español en público incluso en lugares que eran totalmente vascohablantes. Dando un paso más allá en lo que algunos llaman lingüicidio —esto es, la erradicación total de su lenguaje e identidad histórica—, se prohibió a los vascos dar a sus hijos nombres que fueran identificables como tales, como Jon en lugar de Juan.

ETA son las siglas de Euskadi Ta Askatasuna, es decir, Patria Vasca y Libertad. Fue fundada, como EKIN, el verbo vasco que significa «actuar», en 1952 por jóvenes seguidores del PNV pertenecientes a grupos de debate de la universidad de Deusto, en Bilbao. En julio de 1959 cambiaron su nombre a ETA, rompiendo con el partido porque les parecía demasiado acomodaticio respecto a Franco. La gestación de ETA como organización terrorista activa resultó prolongada, en parte porque sus principales líderes fueron detenidos antes incluso de que la campaña hubiera echado a andar, pero también porque sus diferentes facciones se dedicaron a mantener interminables discusiones durante la celebración de las asambleas (y entre éstas) que supuestamente establecían las políticas del grupo de la misma manera que lo hacía el Ard Fheis del IRA/Sinn Fein.

Tres tendencias fundamentales luchaban por el poder en el seno de ETA. Los tradicionalistas, entre los que destacaba José Luis Álvarez Enparanza «Txillardegi», hacían hincapié en los factores etnológicos y lingüísticos, señalando que ETA debería acoger a todos aquellos que hablaran vasco independientemente de su clase o riqueza. En contraste, Paco Iturrioz y otros abrazaban el marxismo de la Nueva Izquierda, con el deseo de que se produjera una lucha de clases junto a los trabajadores españoles, una lucha que se libraría en oposición también a la oligarquía vasca. Esto llevó a que se les tachara de «españolistas», lo que no era ningún halago en los círculos vascos. Fueron también acusados de *attentisme* revolucionario —de esperar a que fueran los propios engranajes de la historia los que avanzaran rechinando— y de trotskistas por los llamados *tercermundistas* que se

mostraban entusiasmados con las luchas de las guerrillas en Argelia o Vietnam. Su principal portavoz era Federico Krutwig Sagredo, hijo de un industrial alemán que vivía en Bilbao. Esta tercera autoproclamada vanguardia revolucionaria se llevó el gato al agua, expulsando a los supuestos trotskistas, mientras que los nacionalistas culturales tomaron su propio camino.

A pesar de la impetuosa retórica del Che Guevara, las actividades iniciales de ETA no diferían mucho de las que emprenden los estudiantes en cualquier lugar: pintarrajear eslóganes o las siglas «ETA» en las paredes y ondear subrepticiamente la bandera vasca roja, blanca y verde. Cuanto más se manifestaba alguien, más susceptible era de ser salvajemente apaleado por la Guardia Civil, que no era conocida por su comedimiento. Si buscas pelea, tiendes a encontrarla, como recordaba un destacado miembro de ETA:

Hace diez años, en las fiestas de Aya, yo llevaba un gorro con cuatro lazos colgando. Ellos [la policía] me agarraron, me quitaron las cintas y se llevaron mi carné de identidad, y me dijeron que viniera a Ataun al día siguiente para recuperarlo. Fui allí y me hicieron volver a casa y regresar con el gorro. Me abofetearon un poco y me gritaron. Y tuve que permanecer callado. Los lazos eran de los colores vascos. Me pusieron una multa de quinientas pesetas y me dejaron marchar⁴.

La participación en huelgas y manifestaciones se prohibió en toda España, y conllevaba una severa respuesta de la policía, que en las provincias vascas era igualmente brutal ante cualquier muestra de conciencia nacional separatista. La represión llevó a los militantes vascos a abandonar las calles de las ciudades por las colinas y montañas donde podían alegar convincentemente que estaban dedicándose a la escalada o al senderismo. La integración en ETA se hacía frecuentemente a través de la cuadrilla de amigos, es decir, el grupo de chavales que salen juntos desde la infancia, y cuyos vínculos eran más estrechos que los de las extensas familias vascas. Los reclutadores de ETA identifican a candidatos apropiados, y después pasan meses preparándoles, mediante tareas de riesgo creciente, hasta que se convierten en miembros hechos y derechos de la organización terrorista. Es un proceso en ocasiones muy prolongado, que presenta oportunidades para el abandono, más que el resultado de un entusiasmo precipitado en el calor del momento.

El 18 de julio de 1961 ETA intentó hacer descarrilar un tren que transportaba a veteranos del bando nacional de la Guerra Civil a las

conmemoraciones por su veinticinco aniversario que se celebraban en San Sebastián. El ataque fracasó miserablemente. En respuesta, 110 miembros de ETA fueron detenidos y torturados, antes de recibir condenas de cárcel de entre quince y veinte años. Otro centenar aproximado de simpatizantes huyó por la frontera a Francia, cuyas tres provincias vasco-francesas —Soule, Labourd y Basse-Navarre—se convirtieron en un santuario para ETA a pesar de que la mayoría de los vascos franceses rechazan la política de la organización. Por supuesto, el muy centralizado Estado francés nunca ha concedido a sus vascos ni un ápice de autonomía.

En el exilio, la cúpula superviviente de ETA formó un comité ejecutivo, con cuatro frentes subordinados para finanzas, política, lucha armada y cultura. Adoptaron un plan de ocho años, en el que la propaganda y el entrenamiento resultarían en una escalada de ataques terroristas diseñados para hacer estallar una completa guerra de guerrillas. La Cuarta Asamblea, celebrada en secreto en España en 1965, fue también testigo de la adopción de la teoría sobre la espiral de violencia basada en el principio de acción-represión-acción. Cada ataque terrorista provocaría una respuesta cada vez más potente, cuya violencia aleatoria haría aumentar la cantidad de seguidores de ETA. En esa época esta estrategia tenía muchos partidarios entre algunos revolucionarios que aparentemente imaginaban estar dirigiendo una obra teatral en la que controlaban cada acción y reacción de los actores. En el caso de los Montoneros en Argentina y los Tupamaros en Uruguay, estos cálculos demostraron ser desastrosos, el tipo de cosas con que los estudiantes de clase media fantasean subestimando lamentablemente las fuerzas oscuras que despertaron con sus lúdicas iniciativas a lo Robin Hood. En Uruguay condujo a la sustitución de la única democracia de América Latina por un Estado policial, mientras que en Argentina el ejército aniquiló la disidencia mediante torturas o desapariciones, incluyendo el lanzamiento de los sospechosos desde helicópteros⁵.

ETA se sometió a algunos cambios de organización, destacando la creación de una rama activista de una treintena de hombres, bajo Javier «El Cabra» Zumalde, que se entrenaba en el monte para emprender la lucha armada. Esto resultaba atípico ya que la mayoría de los terroristas operaban en un radio de cinco a veinte kilómetros en torno a sus casas y tenían empleos normales entre ataque y ataque, que solían tener lugar en intervalos de medio año. Se crearon otros comandos para robar bancos, aunque el primer intento en septiem-

bre de 1965 acabó con la detención de la mayoría de los atracadores. Los robos armados y los intercambios de disparos se hicieron más frecuentes en el periodo 1965-1968, aunque sólo murió una persona, en contraste con los varios heridos que dejaron esos episodios, que invariablemente se convertían en tiroteos. El 7 de junio de 1968 un guardia civil dio el alto a un coche en el que viajaban dos activistas de ETA en un control de carretera a la altura del pueblo de Aduna. Uno de ellos disparó y mató a un guardia civil llamado José Pardines; horas después, en su huida, se topó con otro control en el que la Guardia Civil sacó a Txabi Etxebarrieta del automóvil y le disparó junto a la carretera. Su cómplice, Iñaki Sarasketa, escapó, pero fue capturado, torturado y condenado a pena de muerte, luego conmutada por la de cadena perpetua. Salió de la cárcel en 1977. La muerte de Etxebarrieta sirvió de pretexto para la celebración de conmemoraciones masivas y manifestaciones y para la provocación de disturbios en las calles de San Sebastián, Eibar y Pamplona. San Txabi se convirtió en un imán para futuros reclutamientos.

ETA decidió sacar partido a esta agitación, buscando provocar la reacción que convertiría las manifestaciones en una sublevación. El 2 de agosto de 1968 pistoleros de ETA asesinaron al jefe de policía Melitón Manzanas, un hombre no precisamente conocido por su caritativo tratamiento de los sospechosos de terrorismo, mientras volvía a su casa de Irún. En parte porque llovía con fuerza, nadie pudo identificar con certeza a los asesinos. Franco respondió declarando el estado de excepción en la provincia de Guipúzcoa, que en enero de 1969 se extendió a toda España. Unas dos mil personas fueron arrestadas en las provincias vascas, incluidos Gregorio López Irasuegui y su mujer embarazada Arantxa Arruti, una pareja de la que se sospechaba su implicación en el asesinato de Manzanas. A pesar de su estado, Arruti fue torturada por la policía, lo que le provocó un aborto. Su marido, que había quedado en libertad sin cargos, fue capturado de nuevo cuando junto a otro activista intentó asaltar la prisión de Pamplona para liberarla. Los expertos en balística establecieron que la metralleta checa que llevaba su cómplice encajaba con el arma que había sido usada para disparar al comisario Manzanas. Esta cadena de acontecimientos condujo a la detención de varios dirigentes de ETA, incluidos dos curas católicos que pertenecían al grupo ilegal. Posteriores redadas sirvieron para atrapar a prácticamente la totalidad de los líderes de ETA, aunque José María Eskubi se las arregló para escapar a Francia.

Un tribunal militar juzgó a importantes figuras de ETA que pasaron a ser conocidas como los «Dieciséis de Burgos». Los fiscales solicitaron nueve penas de muerte para seis condenados y penas de cárcel que en conjunto sumaban setecientos años, demandas que atrajeron la atención nacional e internacional en el proceso. Los acusados procuraron politizar el juicio, que duró seis días, despidiendo a sus abogados y levendo llamamientos a favor de la autodeterminación de los vascos, demandas salpicadas con cánticos revolucionarios. Los jueces militares blandieron sus sables ceremoniales. Más allá de la sala del tribunal, hubo disturbios en ciudades vascas que condujeron a violentos enfrentamientos con la policía, y una rama disidente de ETA secuestró a Eugene Beihl, cónsul honorario de Alemania Occidental en San Sebastián. Todo esto estaba diseñado para influir en la elaboración de la sentencia después de que el tribunal hubiera encontrado culpables a todos los acusados con la excepción de Arruti. Unos pocos países rompieron relaciones diplomáticas con España, mientras llegaban peticiones de clemencia del papa Pablo VI y de Jean-Paul Sartre. Los pintores Joan Miró y Antoni Tàpies unieron sus demandas a las de los trescientos catalanes que se encerraron en el monasterio de Montserrat en señal de protesta. Beihl fue liberado cuatro días antes de que se leyera la sentencia. Seis hombres fueron condenados a muerte y el resto a 341 años de cárcel. El 30 de diciembre Franco conmutó las penas de muerte por condenas de 30 años de prisión. Las manifestaciones celebradas en apoyo al régimen le inclinaron inusitadamente hacia la clemencia en víspera de Nochevieja porque las actividades de ETA fueron responsables de un resurgimiento de la extrema derecha española dentro de un franquismo por lo demás decaído.

El hecho de que ETA sobreviviera se debió a la convicción de su brazo militar (ETA-m) de que sólo la violencia sostenida detendría la pérdida de miembros a favor de otras agrupaciones de izquierda que ocurría siempre que se ponía el acento en la lucha política. ETA-m se vio enormemente reforzada cuando en 1970 un sector del ala joven del PNV, Egi-Batasuna, se pasó a la banda, lo que proporcionó el capital humano necesario para una renovada violencia entre 1972 y 1975.

El brazo militar se componía de entre cincuenta y sesenta terroristas activos organizados en comandos de cinco o seis hombres, con una mesa directiva de quince, en el núcleo de la cual había un comité ejecutivo de cuatro personas. Atacaban los negocios y hogares

de conocidos miembros de la derecha en San Sebastián y otras ciudades de la región vasca. En un nuevo avance, secuestraron a un industrial llamado Lorenzo Zabala Suinaga para influenciar el resultado de la disputa laboral que le había llevado a despedir a 154 huelguistas de su fábrica PreciControl. ETA exigió la devolución de sus puestos de trabajo, una compensación, una subida salarial y el reconocimiento de su sindicato. Estas condiciones fueron aceptadas y se liberó a Zabala. Once hombres fueron detenidos en relación con este asunto, todos con edades entre los veintidós y los treinta y seis años, y con profesiones que iban desde la de carnicero, pintor y decorador, o conductor de camión, a la de estudiante. Uno de ellos era un seminarista benedictino llamado Eustaquio Mendizábal Benito «Txikia», que dirigió ETA durante esta fase, organizando sus robos a bancos y secuestros. Murió de un disparo de la policía en una cita con otro etarra en una estación de tren de Algorta en abril de 1973.

En otoño de 1972 ETA recibió el soplo de que sería factible secuestrar al almirante Luis Carrero Blanco, mano derecha de Franco y el sucesor elegido para intentar perpetuar el régimen. Carrero Blanco asistía a misa cada mañana en la misma iglesia de Madrid, acompañado únicamente de un chófer y un guardaespaldas. El objetivo del secuestro era asegurar la liberación de 150 presos etarras. Mientras tanto, ETA decidió intervenir en otro conflicto laboral, a la vez que confiaba en obtener una recompensa de su siguiente víctima secuestrada. La organización se fijó en el industrial navarro Felipe Huarte, vástago de una familia cuyo patrimonio se estimaba en 100 millones de dólares, y cuya red de fábricas estaba plagada de problemas laborales. Tras pagar a los huelguistas para asegurarse de que la huelga en la planta de Torfinasa se prolongaba más allá de su fácil resolución, ETA irrumpió en la casa de Huarte el 16 de enero de 1973 y encerró a sus tres hijos y cuatro sirvientes en un sótano hasta que éste y su mujer regresaron. A Huarte se lo llevaron a una cueva cerca del domicilio de Mendizábal y después a un piso franco próximo a San Sebastián. Se pagó una recompensa del equivalente en pesetas a 800.000 dólares a unos intermediarios en Bruselas y París. Después ETA asaltó un polvorín en Guipúzcoa, haciéndose con 3.000 kilos de explosivo, parte de los cuales fueron usados para matar a Carrero Blanco después de que las ideas de secuestrarle fueran desechadas a favor del asesinato.

Cuatro hombres habían alquilado un apartamento desde el que podían observar su avance cada mañana hasta la iglesia de San Francisco de Borja, cerca de la embajada estadounidense en Madrid. En ese momento Carrero Blanco había sido ascendido ya a la presidencia del gobierno, con lo que el refuerzo de su seguridad hacía inviable el secuestro. Mientras se ordenaba a otros etarras que incrementaran el ruido ambiental mediante incendios premeditados y atentados con bombas, cuatro hombres de un comando llamado Txikia en honor del asesinado Mendizábal se preparaban para llevar a cabo la Operación Ogro. Alquilaron un bajo en el número 104 de la calle de Claudio Coello, alegando ser escultores. Eso explicaba el ruido y el polvo que se producía mientras excavaban bajo la calzada, con el fin de formar un túnel en forma de T. Dentro de éste se colocaron de setenta y cinco a ochenta kilos de explosivo Goma 2, directamente debajo del lugar al que se conduciría a Carrero Blanco tras visitar la iglesia. Se aparcó un coche en doble fila para hacer que el conductor redujera la velocidad al llegar al punto fatal. El 20 de diciembre de 1973, miembros de ETA disfrazados de electricistas que trabajaban con unos cables detonaron la bomba mientras el automóvil de Carrero Blanco disminuía su velocidad. La explosión lanzó el coche por encima de la altura de cinco pisos del muro de la iglesia matando en el acto a sus tres ocupantes.

Un resultado no previsto de este asesinato de alto perfil fue que aquellos miembros de ETA que favorecían un enfoque más político formarían años más tarde —en 1978— la coalición Herri Batasuna, que paradójicamente más adelante se erigiría en rama política de la facción militar, aunque muchos de sus miembros nieguen este hecho. Aparte de las señales evidentes de que el régimen de Franco se estaba derrumbando, esos años fueron testigos también en Europa del colapso del Nuevo Estado de Salazar en Portugal y del fin de los coroneles griegos. Un atentado con bomba en el café Rolando, frecuentado por miembros de la cercana Dirección de Seguridad, que dejó nueve muertos y cincuenta y seis heridos, condujo a los miembros de ETA más motivados políticamente a intentar restablecer un control más firme sobre los etarras que cometían las acciones de combate. Querían una mayor coordinación entre el brazo militar y un movimiento de las masas de izquierda. Cuando ETA-m rechazó esta estrategia, el ala político militar se convirtió en ETA-pm, que con el tiempo dio origen a su propio partido, Euskadiko Ezkerra o «izquierda vasca», después del regreso de España a la democracia. Aunque los objetivos ideológicos últimos de ETA-pm eran más revolucionarios, la radicalidad de ETA-m supuso que para comienzos de la década de 1980 ya tenía tres veces más miembros, además de cualquiera que estuviera desanimado ante la más lenta ruta político-militar hacia la revolución.

Las respuestas gubernamentales al terrorismo de ETA incluían draconianas leyes antiterroristas, tribunales militares y ubicuas parejas de la Guardia Civil en pueblos y carreteras. Estos últimos recibían un pago extra en concepto de peligrosidad y generosos permisos por servir en el norte. Había también una más oscura respuesta «extralegal», la primera «guerra sucia» emprendida por miembros de la policía y de los servicios de seguridad. Mientras los vascos, y muchos oponentes democráticos del régimen, celebraban la muerte de Carrero Blanco con la «Canción de Carrero», lanzando al aire gorros y otras prendas mientras cantaban «Voló, voló, Carrero voló», los admiradores de este último devolvieron el golpe en abril de 1975 cuando la librería Mugalde de Bayona sufrió un atentado con bomba a manos de un misterioso grupo que se hacía llamar Batallón Vasco Español. Siguieron unos pocos ataques más, muchos marcados por una extraordinaria incompetencia, como el del ex miembro de la OAS que se voló a sí mismo en Biarritz mientras se preparaba para matar a un líder de ETA. Tras la muerte de Franco en noviembre de 1975, el país avanzó rápidamente hacia la democracia bajo el rey Juan Carlos desde julio de 1976, y su primer ministro, el moderado conservador Adolfo Suárez. Se estableció el Estado de derecho y una democracia de múltiples partidos, y se invitó a los vascos a aceptar un Estatuto de Autonomía que, tras unas negociaciones que fueron como sacarse una muela, les daba su propio gobierno regional y más independencia de la que habían disfrutado nunca. Todos y cada uno de los miembros de ETA encarcelados fueron amnistiados, aunque esto se produjo en un proceso lento en el que se estudió caso por caso, lo que irritó a los vascos. En lugar de responder a este nuevo clima, ETA aumentó sus operaciones militares. Esto requiere una explicación porque, para quien lo mira desde fuera, ETA parecía haber logrado la mayor parte de lo que pretendía.

Resulta increíblemente difícil para cualquiera que no use el lenguaje de las minorías entender esta mentalidad, aunque quizá se pueda lograr si uno es galés o flamenco. Los nacionalistas radicales vascos consideraban cualquier otra posibilidad que no fuera la independencia total como un equivalente al lingüicidio, una postura que apenas —o incluso en absoluto— tenía en cuenta la inmersión voluntaria de sus conciudadanos vascos en una cultura española que floreció tras la muerte de Franco, y el hecho de que la literatura en lengua vas-

ca apenas existía. Aproximadamente un 24 por ciento de los votantes vascos rechazaron la nueva Constitución en el referendo de diciembre de 1978, en contraste con el 8 por ciento de votantes en el resto de España. Tres meses después un 10 por ciento de los vascos votaba a favor de Herri Batasuna en las elecciones a un parlamento que este partido se negaba a reconocer. En marzo de 1980, el porcentaie de Herri Batasuna se elevaba al 16,5 por ciento en las primeras elecciones al parlamento autonómico vasco. El respaldo al nacionalismo vasco extremista ha permanecido en alrededor de un 12 por ciento de la población vasca, siendo más fuerte el apoyo en las áreas en las que se habla euskera. El 40 por ciento de los terroristas de ETA provienen también de las áreas vascohablantes. Merece la pena subrayar que el mayor partido político de Navarra, la Unión del Pueblo Navarro (UPN), fundado en 1977 para oponerse al nacionalismo vasco, se lleva aproximadamente un 37 por ciento de los votos en las elecciones, y que la mayoría de los vascos también se oponen a ETA, que ha asesinado a mucho políticos vascos del PNV⁶.

Como si se quisiese avivar la paranoia separatista vasca, en julio de 1978 unos misteriosos pistoleros dispararon sobre un automóvil conducido por el antiguo líder de ETA Juan José Etxabe en Francia. Él resultó gravemente herido, pero su mujer murió bajo una lluvia de balas que casi la parte por la mitad. Otra figura de ETA, José Miguel Beñaran Ordeñana, fue despedazado por la explosión de una bomba en la somnolienta ciudad francesa de Anglet. El hecho de que los gobiernos democráticos, por motivos tácticos, no acabaran de reformar el ejército, los servicios de inteligencia y de policía —quienes de ese modo consintieron la Transición de España a la democracia—significó que partes del aparato del Estado estaban todavía ligadas a los viejos métodos de asesinato y tortura, usando asesinos argentinos, franceses e italianos para hacer el trabajo sucio.

En noviembre de 1980 unas cuarenta personas estaban bebiendo en el interior del bar Hendayais justo al otro lado de la frontera francesa, cuando dos hombres entraron y abrieron fuego con una escopeta y ráfagas de una semiautomática. Dos clientes resultaron muertos y otros nueve heridos. Los pistoleros salieron huyendo en un Renault 18 verde, que atravesó a toda velocidad el puesto fronterizo francés y acabó estrellándose en el lado español. Tres hombres salieron con las manos en alto y fueron rápidamente rodeados por la Guardia Civil y por policías armados. Uno de los detenidos ofreció un número de teléfono en Madrid, alegando que estaban cumpliendo órdenes oficiales.

Un policía telefoneó a Manuel Ballesteros, responsable de inteligencia policial y del Mando Unificado de la Lucha Contraterrorista, y el mayor experto sobre ETA en España. Ballesteros les dijo: «Dejadlo correr. Nadie ha visto u oído nada». Los hombres desaparecieron, con sus identidades sin esclarecer, y nunca se volvió a saber de ellos. Al otro lado de la frontera, la policía francesa estallaba de furia.

El jefe de la inteligencia policial española estaba encubriendo una guerra sucia emprendida por un diverso surtido de radicales de extrema derecha. Éste incluía a Fuerza Nueva y a los Guerrilleros de Cristo Rey, una versión de los católicos mexicanos que habían luchado contra los rojos anticlericales en la década de 1930. El personal incluía a derechistas errantes y políglotas que habían recalado en España empujados por la marea de las causas perdidas: antiguos miembros de las OAS, el movimiento neofascista italiano Ordine Nuovo, la Alianza Anticomunista Argentina o Triple A, además de un surtido de gánsteres, visionarios y mercenarios, arrastrados a lo que bajo Franco había sido un tristemente célebre refugio para ex nazis y colaboracionistas europeos de la guerra. Puesto que esta primera guerra sucia nunca ha sido investigada a fondo, sigue sin estar claro el grado de implicación del gobierno.

Estos asesinatos fueron usados como una justificación parcial para las propias atrocidades de ETA. La mayoría de sus ataques consistían en homicidios individuales o asesinatos de pequeños grupos de guardias civiles, que soportaban los peores embates de su violencia. En abril de 1976 uno fue imaginativamente asesinado por una bandera vasca trampa que le electrocutó. La búsqueda de objetivos se extendió a la policía vasca, la Ertzaintza, creada en los años ochenta, cuando comenzaron a participar en campañas antiterroristas, y también a funcionarios de prisiones, ya que la retención de prisioneros de ETA en remotas cárceles españolas se convirtió en motivo de agravio. Los agentes de la Ertzaintza tenían que llevar pasamontañas negros para ocultar sus identidades. ETA también mató a varios alcaldes y figuras del gobierno local por supuesta colaboración con las autoridades españolas. En la lucha contra ETA han muerto más altos oficiales del ejército que en ninguna guerra española moderna. Algunos asesinatos de gran calado tuvieron como objetivo a varias importantes figuras de las fuerzas armadas españolas, incluidos más de una docena de generales, con el objetivo de socavar el compromiso que el ejército había establecido con la España democrática, un compromiso que zozobró en febrero de 1981 cuando el teniente coronel Antonio Tejero y sus correligionarios secuestraron el parlamento español durante un día. El ejército en particular se ha considerado a sí mismo como el responsable constitucional de defender la integridad territorial de España, provocando ruido de sables en todo momento en que las concesiones hacia las tendencias separatistas parecían irse de las manos. Los industriales eran el objetivo favorito de los secuestros (y los disparos en las rodillas), ya fuera para recaudar fondos o para intentar ganarse el favor de trabajadores inmersos en disputas laborales. Más recientemente ETA ha atentado contra jueces, abogados y periodistas, incluidos los de origen vasco lo suficientemente valientes como para criticar a estos fanáticos nacionalistas. Yo he tenido la experiencia de ser entrevistado para la CNN española, en relación con un tema no conectado con el terrorismo, por un presentador cuyos cuatro guardaespaldas de la policía le estaban esperando en la puerta del estudio. Por la noche, cualquier restaurante decente de Madrid frecuentado por periodistas o políticos tiene guardaespaldas merodeando por la acera. Finalmente, ETA también intentó cargarse una de las mayores industrias de España colocando bombas en el aeropuerto de Barajas y en enclaves tan turísticos como Benidorm o Marbella. Aunque la banda se enorgullece de la precisión de sus ataques, y del uso de advertencias telefónicas previas, varios atentados con bomba han tenido como resultado un importante número de víctimas inocentes. En un incidente, un niño pequeño resultó mutilado en Rentería tras dar una patada a una bomba que no había estallado al paso de un jeep de la Guardia Civil. El 19 de julio de 1987 una bomba de ETA mató a veintiuna personas e hirió a cuarenta y cinco en el centro comercial Hipercor de Barcelona.

ETA también ha repartido muerte en el curso de sus propias peleas entre facciones y contra cualquiera lo suficientemente temerario como para intentar lograr la amnistía mediante los planes de reinserción social del gobierno español. En abril de 1976 ETA-pm secuestró a Ángel Berazadi, otro industrial. Fue asesinado bajo las órdenes de Miguel Ángel Apalategui Ayerbe «Apala», líder del comando Berezi de ETA-pm, que estaba huido por matar a un guardia civil. El asesinato de Berazadi chocaba con la estrategia del líder de ETA-pm, Eduardo Moreno Bergareche «Pertur», quien por entonces estaba buscando un alto el fuego con Madrid con el fin de llevar a ETA por la vía política. El 23 de julio de 1976 Pertur y Apala se reunieron en San Juan de Luz, en el lado francés de la frontera. Pertur accedió a hablar sin sus respectivos guardaespaldas y se marchó con Apala

en un coche. Nunca se le volvió a ver. Apala afirmó que tras su discusión Pertur había caído en manos de la policía española, que le había asesinado.

En junio de 1977 Apala fue arrestado por la policía francesa y retenido en prisión preventiva en Marsella mientras los franceses rechazaban las peticiones de extradición de España. Un mes antes su grupo, Berezi, había secuestrado al industrial más importante de Bilbao, Javier de Ybarra, exigiendo la liberación de veinticuatro presos vascos, los cuales, a excepción de dos, fueron puestos en libertad. La detención de Apala llevó a ETA a subir las apuestas, demandando una recompensa de mil millones de pesetas, una suma que ni siquiera la familia Ybarra podía reunir. El 20 de junio su familia recibió el mensaje de que estaba muerto, con un mapa que mostraba la localización de su cuerpo, que fue finalmente encontrado envuelto en un plástico en el alto de Barazar. Con el acompañamiento de masivas manifestaciones en las provincias vascas, los tribunales franceses se esforzaban para decidir la suerte de Apala, una cuestión que adquiría tintes emotivos por su inicio de una huelga de hambre. En septiembre de 1977 sus abogados le consiguieron la libertad bajo fianza; nunca se presentó a su primera cita programada para comparecer en la comisaría de policía de Marsella.

Aquellos que deciden renunciar a la violencia de ETA tienden a no vivir mucho. María Dolores González Katarain era una dirigente de ETA ya que, como Herri Batasuna, la organización abraza diversas fes contemporáneas. Devota católica, había querido convertirse en misionera en América Latina hasta que su fervor fue reconducido hacia una causa política. A los diecisiete años se unió a ETA, adquiriendo el nombre en clave de «Yoyes». En 1976 se vio obligada a huir a Francia, donde comenzó a tener dudas sobre la organización para la que luchaba. Llamaba la vida del terrorista «esta tumba, esta muerte en vida que estaba comenzando a asfixiarme y en la que estaba físicamente muriendo». En 1980 se trasladó a México, donde estudió sociología y tuvo un hijo llamado Akaitz. Decidió regresar a Francia con el fin de negociar su camino de vuelta a la normalidad anterior a su ingreso en la banda terrorista. Las autoridades españolas accedieron a no presionarla para que renunciara a sus posiciones políticas, mientras ETA le aseguraba que estaría segura. En 1985 retornó a Ordizia donde, contra su voluntad, el gobierno español la ensalzó como ejemplo de terrorista reformada. Sobre las paredes aparecieron grafitis amenazantes. Llamar públicamente a Herri Batasuna «marioneta del

militarismo fascista [de ETA]» le costó la vida. El 10 de septiembre de 1986 Yoyes paseaba con su hijo para ver las fiestas de la localidad. Un asesino de ETA le seguía los pasos: «Fui hasta Yoyes y le dije: "¿Eres Yoyes?". Me preguntó quién era yo. Le dije: "Soy de ETA y he venido a ejecutarte". Inmediatamente le disparé dos tiros con mi pistola en el pecho. Cayó al suelo y la rematé con otro tiro en la cabeza»⁷.

En octubre de 1982 diez millones de españoles votaron a favor del partido socialista, el PSOE, en un amanecer embriagador que condujo al poder a muchos radicales de la década de los sesenta bajo un carismático presidente, el abogado Felipe González. Entre sus nombramientos estuvo el de José Barrionuevo, que en 1969 había renunciado a su pasado franquista para unirse al PSOE. Había sido teniente de alcalde del ayuntamiento de Madrid y responsable de la policía de la ciudad. Se convirtió en ministro del Interior de España, conservando a muchos de los oficiales de policía e inteligencia que habían quedado de los años de Franco. Después de que ETA asesinara al general que comandaba la división de élite del ejército Brunete, los socialistas esbozaron el plan ZEN (Zona Especial Norte), que perpetuaba la política franquista de saturar el País Vasco de una intrusiva presencia policial. Esto les servía de poco porque ETA podía replegarse para cruzar la frontera y refugiarse en su santuario de Francia.

Los esfuerzos españoles para conseguir que Francia desarticulara la organización fracasaron porque los franceses no llegaron a percatarse de que los socialistas estaban concediendo muchas de las demandas de los nacionalistas vascos; los franceses se aferraron además a una visión romántica de los refugiados políticos para compensar sus propias políticas dudosas de los años treinta y cuarenta. Esto condujo a altos cargos del gobierno de González, que muchos sospechan que incluían al propio presidente, a lanzar una segunda guerra sucia que había comenzado incluso antes de que se formara el escuadrón de la muerte del GAL, cuando dos jóvenes miembros de ETA, Joxean Lasa y Joxi Zabala, este último huido a Francia junto a su amigo tras un atraco, se desvanecieron en otoño de 1983. Aunque la policía no se dio cuenta en su momento, sus huesos aparecieron en la costa de Alicante dos años después al ser desenterrados por un perro. Como se sabría mucho después, habían sido secuestrados en Bayona por la Guardia Civil y retenidos después en un palacio asignado al gobernador civil y el Ministerio del Interior. Habían sido también torturados repetidamente antes de ser disparados en la nuca. Poco después de su desaparición, un líder de ETA que conducía su motocicleta por Hendaya fue embestido por un Ford Talbot que apareció detrás de él. Cuatro hombres le pusieron una capucha en la cabeza e intentaron meterle en el maletero del coche. La policía francesa se cruzó por casualidad con este intento de secuestro y se encontró arrestando a un inspector de policía, un capitán y dos sargentos de la mejor unidad antiterrorista española. Éstos alegaron que todo el suceso había sido causado por un accidente de tráfico. Una vez puestos en libertad bajo fianza desaparecieron de vuelta a España.

La formación responsable de estas infames actividades se llamaba Grupos Antiterroristas de Liberación, o GAL. Sus secuestradores, asesinos y expertos en bombas constituían un peculiar surtido de boxeadores, taberneros, gánsteres marselleses, mercenarios y una senora tan bajita que el retroceso de las pistolas y rifles que usó para matar a nueve personas casi la tumbaba de manera sistemática. Su apodo era «La dama negra», o «La asesina rubia» cuando lucía una peluca rubia platino. A diferencia de aquellos con ideología neofascista que llevaron a cabo la primera guerra sucia, estos individuos trabajaban como cazarrecompensas, por dinero. El hecho de que tuvieran alias como «el Padrino» da una idea del panorama general. Su estrategia no se arredraba ante alguna ocasional baja colateral francesa ya que, como los GAL habían anticipado correctamente, esto impulsó a los franceses a recurrir, en septiembre de 1984, a las leyes existentes sobre seguridad nacional que les permitían deportar a los terroristas de ETA a remotos terceros países como Panamá o Togo, a los que se pagaba para que los recibieran. Las transcripciones de las conversaciones grabadas por los servicios de inteligencia españoles revelan que, en la época en la que el GAL estaba siendo sujeto a debate, algunos de los agentes de más bajo rango albergaban más dudas que sus superiores. Un sargento de la Guardia Civil, Pedro Gómez Nieto, decía a su jefe, el coronel Enrique Rodríguez Galindo:

Vamos a ver, mi comandante: ¿Qué garantías tenemos de que eso valga para algo? Es decir, mi comandante: nosotros vamos allí, quitamos a una persona de en medio. Eso es lo de menos, usted sabrá lo que ganamos con eso. Usted ya sabe que una cosa que podemos lograr es que haya diez adeptos a ETA que se apunten a raíz de eso. ¿Se ha pensado sobre el tipo de publicidad que se va a dar a eso? ¿Qué cobertura pública vamos a dar a los medios de difusión?

Como para ilustrar esta objeción, el 20 de noviembre de 1984 dos hombres armados con aspecto de sudamericanos entraron en la clínica bilbaína de Santiago Brouard, quien estaba tratando a una niña mientras sus padres le observaban. Además de ser un pediatra muy querido, «el tío Santi» era un destacado líder de Herri Batasuna, a la que representaba en el parlamento vasco. Los pistoleros le dispararon cinco veces en la cabeza y una en la mano mientras trataba de defenderse del único ataque de los GAL perpetrado en suelo español. Aparte de la enfermera, que recordaba a gitanos con pelucas empujándola para abrirse paso, los padres eran los únicos testigos, pero no comparecieron cuando se juzgó a los asesinos. Se había producido un accidente de tráfico en el que la madre y la hija habían muerto; el marido quedó ciego. Pistoleros de ETA tendieron una emboscada a un general cuyo hermano, ministro del Interior hasta 1982, había instituido el programa de reinserción social destinado a desradicalizar a los seguidores de ETA. Se calcula que medio millón de personas acudieron al funeral de Brouard. Los asesinos del GAL tenían una consideración por las bajas colaterales similar a la de la propia ETA. En febrero de 1985 el bar Batxoki de Petit Bayonne sufrió un ataque (entre los heridos había niñas de entre tres v cinco años), a manos de hombres armados que habían expresado su preocupación por la presencia de los niños pero habían recibido las órdenes expresas de su jefe de ignorarla. Exactamente un año después, unos asesinos del GAL que habían montado una emboscada en una remota carretera cerca de Bidarray lograron matar a un pastor de sesenta años y a una turista parisina de dieciséis que deseaba ver a unos corderos recién nacidos mientras pasaba una temporada en la caravana de sus padres. El duro ministro del Interior del nuevo gobierno de Jacques Chirac, Charles Pasqua, decidió aterrorizar a los terroristas. Un líder de ETA con estatus de refugiado fue deportado a Argelia, mientras —haciendo uso de un edicto de 1945—veintiséis activistas de la banda eran entregados directamente a España.

Además de tener un efecto reducido o inexistente sobre las atrocidades de ETA, que se cobraron una media de cuarenta muertos al año a lo largo de la década de los ochenta, las revelaciones de periodistas de investigación y magistrados sobre los escuadrones de la muerte del GAL empujaron al gobierno socialista a emplear todas las argucias imaginables para impedirlas, en uno de los episodios de encubrimiento menos edificantes y más prolongados de la moderna historia de Europa. Los idealistas con melenas a la moda de la década

de los sesenta habían mutado, durante lo que serían catorce años en el poder, para convertirse en una camarilla corrupta que establecía políticas alrededor del bar privado del palacio de la Moncloa —la bodeguilla— en compañía de la «gente guapa», mientras figuras menos respetables disparaban a niños y pastores en el País Vasco.

Magistrados tenaces como Baltasar Garzón siguieron la pista del dinero, descubriendo «fondos reservados» vinculados al Ministerio del Interior que estaban siendo usados para pagar las actividades del GAL. Oficiales individuales de policía, como el superintendente Amedo, tenían cuentas bancarias que contenían sumas exorbitantes; Amedo poseía veintisiete millones de pesetas cuando su sueldo neto anual era de poco menos de dos, una disparidad que parecía explicar su sibarita estilo de vida. Los socialistas emplearon todos los métodos a su disposición para obstruir las investigaciones de los asesinatos del GAL —especialmente reteniendo evidencias y ofreciendo apoyo a los acusados para evitar que se convirtieran en testigos de la fiscalía— a la vez que difamaban a periodistas, abogados y a la oposición conservadora por seguir adelante con ello. El propio González insistió en que «nadie conseguirá demostrar» los vínculos entre el GAL y el Estado, mientras que a la vez alegaba que «el Estado de derecho se defiende en los tribunales y en los salones, pero también en las alcantarillas», una retorcida manera de decir que las acciones del GAL estaban justificadas. Aparentemente prefiriendo a Hobbes que a Montesquieu, González afirmaría posteriormente que el poder judicial se había vuelto demasiado poderoso en relación con el ejecutivo, elegido en las urnas. Otra vergonzosa forma de defensa fue alegar que «todos los demás lo hacen». La esposa de González, la destacada demócrata y feminista Carmen Romero, afirmó: «¿Cómo nos va a quitar el sueño un fenómeno que ha ocurrido en España como ha ocurrido en Francia, Alemania, en todos los países democráticos? Fenómenos de juego sucio, de ajuste de cuentas, [...] fenómenos que son normales en muchísimos países». Esto lo dijo en el contexto del encarcelamiento de José Barrionuevo, el ex ministro del Interior de su marido, durante diez años por su implicación con el GAL, que siguió a la entrada en prisión de varios altos cargos de la policía8.

Las atrocidades de ETA marcharon en paralelo con estas revelaciones. Unas breves treguas en la década de los ochenta acabaron en nada, mientras ETA se quejaba del ritmo de las negociaciones. En 1992 lanzó su versión local de la Intifada palestina —la *kale borroka* o lucha callejera— en la que grupos de jóvenes y menores cometían ac-

tos de vandalismo contra autobuses, farolas, cajeros automáticos, cabinas telefónicas y contenedores de basura o contra quien llevara un periódico español. Esta estrategia estaba diseñada para aumentar la corriente de reclutas que carecían de las experiencias de haber sido golpeados por la Guardia Civil que vivieron sus abuelos. Tres años después, ETA presentó una «Alternativa democrática» en la que ofrecía un cese de la violencia a cambio de que Madrid reconociera la soberanía del pueblo vasco sobre «su» territorio, el derecho de autodeterminación y la liberación de todos los presos de ETA. Fue rechazada. Ese año, ETA fracasó por poco en su intento de asesinar al líder de la oposición, José María Aznar, con un coche bomba y realizó también un atentado frustrado contra la vida del rev Juan Carlos. En julio de 1997, momento en el que Aznar era ya presidente, ETA secuestró a un concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco, exigiendo al gobierno el acercamiento de todos los presos de ETA al País Vasco en un plazo de cuarenta y ocho horas. Fue asesinado de un disparo cuando el gobierno no respondió. Seis millones de personas acudieron a las manifestaciones celebradas por toda España —incluido el País Vasco— para pedir su liberación, y muchos más se echaron a la calle a gritar «Asesinos» después de que Blanco fuera ejecutado. En 1998 ETA declaró un alto el fuego unilateral, con el fin de negociar con el gobierno de Aznar un alto el fuego que los terroristas rompieron en 2000 y que pudo haber sido declarado únicamente para lograr la reagrupación y el rearme. El 6 de noviembre de 2001 sesenta y cinco personas resultaron heridas por un coche bomba en Madrid, y se produjeron más atentados en estadios de fútbol y enclaves turísticos. Los sucesos del 11 de septiembre llevaron a la ilegalización de Herri Batasuna y del grupo juvenil nacionalista Jarrai. La policía española ha desbaratado varios atentados de ETA—incluida la detección de un enorme camión bomba en una autopista—. Otra tregua «permanente» declarada el 22 de marzo de 2006 fue anulada el 5 de junio del año siguiente. Para anunciar este acontecimiento ETA asesinó a dos inmigrantes ecuatorianos en diciembre de 2006 mientras echaban una siesta en un coche en el aeropuerto de Barajas en el momento en que la banda derribó el aparcamiento con una bomba. ETA se disculpó por lo que llamó «daños colaterales».

La banda sigue embarcada en la lucha armada hasta el día de hoy. Su reclamación es que ha sido estafada al negársele las posibilidades que supuestamente se le prometieron cuando los vascos lograron la autonomía. Alega además que muchas de las cosas que se concedie-

ron a los vascos nunca fueron llevadas a la práctica. Los familiares de los presos de ETA se sienten agraviados por tener que hacer un viaje de ida y vuelta de dos mil kilómetros en un autobús para cada visita de cuarenta y cinco minutos a sus padres o maridos en la remota Huelva. Los sospechosos de tener conexiones con ETA se quejan de haber recibido palizas, descargas eléctricas o amenazas de violación con un vibrador, aunque los médicos forenses contradicen estas reclamaciones. Lo que no se discute es que ETA se ha adentrado tan lejos vadeando en un río de sangre que psicológicamente no puede volver atrás. Hacerlo deshonraría a demasiados de sus gloriosos muertos. Los sucesivos gobiernos de España se han resistido a negociar con la banda, y en última instancia ilegalizaron Herri Batasuna, lo que significó que unas cuantas ciudades vascas se vieron privadas de votar por quienes querían. Eso a su vez se tradujo en que políticos nacionalistas supuestamente democráticos, al margen de Batasuna, emitieran respuestas ambiguas a la violencia de ETA que resultaban suficientes para justificarla. En la actualidad, ETA está intentando obtener mediante extorsión enormes sumas de hasta cuatrocientos mil euros de cada uno de los dos mil negocios vascos a los que ha enviado cartas de amenaza. La situación es tan grave y compleja que el sacerdote redentorista norirlandés Alex Reid está entre los religiosos que intentan resolverla. Allí también hay abundancia de experiencias desoladoras⁹.